

- 1 Patentes farmacéuticas  
Pharmaceutical patents
- 2 Marcas y diseños  
Trademarks and designs
- 3 Gastos de almacenamiento y destrucción  
Storage and destruction costs
- 4 Dos nuevos socios  
Two new partners

**BARCELONA**  
C/ Josep Irla i Bosch, 5-7  
08034 Barcelona  
Tel: +34 93 202 34 56

**MADRID**  
C/ Núñez de Balboa, 120  
28006 Madrid  
Tel: +34 91 353 36 77

**LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**  
C/ Padre José de Sosa, 1  
35001 Las Palmas de Gran Canaria  
Tel: +34 928 33 29 26

## 1 MEDIDAS CAUTELARES REVOCADAS POR INDICIOS DE NULIDAD DEL CCP DE TRUVADA® PRELIMINARY INJUNCTIONS REVOKED DUE TO PRIMA FACIE INVALIDITY OF TRUVADA® SPC

El 20 de octubre de 2017 el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona alzó unas medidas cautelares que previamente había acordado sin audiencia de parte a instancia de Gilead en relación con la inminente comercialización de los medicamentos genéricos de tenofovir + emtricitabina de las compañías Mylan y Teva.

### Antecedentes

Gilead es titular de la patente europea EP0915894 sobre el tenofovir disoproxil (en adelante, EP'894) y del certificado complementario de protección C20050034 derivado de la misma sobre la combinación de tenofovir disoproxil + emtricitabina (en adelante, CCP'034).

El 25 de julio de 2017 la patente EP'894 caducó y entró en vigor el CCP'034.

Inicialmente, el CCP había sido denegado por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Sin embargo, Gilead recurrió la decisión ante los Tribunales de lo contencioso-administrativo (Tribunal Superior de Justicia de Madrid), que finalmente acordaron su concesión mediante sentencia de 9 de septiembre de 2016.

La reivindicación 27 de la patente EP'894 sirvió de fundamento para la concesión del CCP, a pesar de que no menciona siquiera la emtricitabina, que tampoco se menciona en ningún pasaje de la descripción de la patente. Dicha reivindicación dice así: *“Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-25 junto con un vehículo farmacéuticamente aceptable y opcionalmente otros agentes terapéuticos”*.

On 20 October 2017, Commercial Court n. 4 of Barcelona lifted the preliminary injunctions it had previously granted ex parte at the request of Gilead in relation to the imminent launch to the market of tenofovir + emtricitabine generic medicinal products of companies Mylan and Teva.

### Background

Gilead is the holder of European patent EP0915894, which claims tenofovir disoproxil (hereinafter, EP'894), and of supplementary protection certificate C20050034 based on the same for the combination of tenofovir disoproxil + emtricitabine (hereinafter, SPC'034).

On 25 July 2017 the EP'894 patent expired and SPC'034 entered into force.

Initially, the SPC was refused by the Spanish Patents and Trademarks Office. However, Gilead appealed the decision to the administrative Courts (Madrid High Court of Justice), which ultimately ruled in favor of the grant of the SPC by judgment dated 9 September 2016.

Claim 27 of EP'894 served as basis for the grant of the SPC, despite the fact that it does not even mention emtricitabine, which is not mentioned either anywhere throughout the patent's specification. The wording of claim 27 is as follows: *“A pharmaceutical composition comprising a compound according to any one of claims 1-25 together with a pharmaceutically acceptable carrier and optionally other therapeutic ingredients”*.

Gilead comercializa un medicamento de tenofovir + emtricitabina, Truvada®, para el tratamiento y prevención de infecciones virales, incluido el VIH.

### Hechos

En mayo y junio de 2017 Gilead solicitó y obtuvo medidas cautelares sin audiencia de parte contra las demandadas (Mylan y Teva) por supuesta inminente infracción del CCP'034.

Las demandadas se opusieron a las medidas cautelares alegando la nulidad del CCP con base en el artículo 15.1.a), en relación con el artículo 3, del Reglamento 469/2009 sobre CCPs, e invocaron la jurisprudencia aplicable del TJUE.

En concreto, las demandadas alegaron que la reivindicación 27 tendría exactamente el mismo objeto y alcance con o sin el inciso “y *opcionalmente otros agentes terapéuticos*”, que sin embargo había sido el único fundamento para la concesión del CCP para la combinación de tenofovir + emtricitabina.

Así, la patente de base reivindica un principio activo (tenofovir), pero no su concreta combinación con emtricitabina (ni con ningún otro principio activo). En este sentido, y conforme a la jurisprudencia del TJUE, el CCP para la combinación sería contrario al Art. 3.a) del Reglamento y, por tanto, nulo.

Por su parte, Gilead alegó que el CCP sería válido por cuanto la combinación estaría “comprendida” en el ámbito de protección de la reivindicación 27 de la patente. Gilead también alegó que, en todo caso, la cuestión ya había sido resuelta por el TSJ de Madrid, cuya sentencia sería vinculante para el Juzgado de lo Mercantil en sede de medidas cautelares.

### Decisión

El Juzgado acogió el planteamiento de Mylan y Teva y revocó las medidas cautelares mediante Auto de 20 de octubre de 2017, deliberado por los tres Jueces de Patentes de Barcelona.

En su resolución, el Juez aclaró en primer lugar que la sentencia del TSJ de Madrid había resuelto un recurso de la propia Gilead contra un acto administrativo (denegación del CCP), por lo que no puede tener fuerza de cosa juzgada frente a terceros y por tanto no es vinculante.

A continuación, y tras revisar la jurisprudencia aplicable del TJUE desde el asunto *Medeva* (C-322/10), el Juez concluyó que la reivindicación 27 de la patente EP'894 no protege la combinación de tenofovir + emtricitabina en el sentido del Artículo 3.a) del Reglamento, por lo que *prima facie* el CCP'034 sería contrario a dicho precepto y, por tanto, nulo.

Gilead commercializes a tenofovir + emtricitabine medicinal product, Truvada®, for the treatment and prevention of viral infections, including HIV.

### Facts

In May and June 2017 Gilead requested and was granted *ex parte* preliminary injunctions against the defendants (Mylan y Teva) for alleged imminent infringement of SPC'034.

The defendants opposed the preliminary injunctions alleging the invalidity of the SPC on the grounds of Article 15.1.a), in relation to Article 3, of the SPC Regulation 469/2009, and invoked the applicable case law from the CJEU.

More specifically, the defendants alleged that claim 27 would have exactly the same object and scope with or without the line “*and optionally other therapeutic ingredients*”, which, nevertheless, had been the sole grounds for the grant of the SPC for the combination of tenofovir + emtricitabine.

Thus, the basic patent claims an active ingredient (tenofovir), but not its specific combination with emtricitabine (nor with any other active ingredient). In this regard, and according to CJEU case law, the SPC for the combination would be contrary to Article 3.a) of the Regulation and therefore invalid.

For its part, Gilead pleaded that the SPC would be valid because the combination would be “comprised” within the scope of protection of claim 27 of the patent. Gilead also argued that, in any event, the matter had already been decided by the Madrid High Court of Justice, whose decision would be binding for the Commercial Court in preliminary injunction proceedings.

### Decision

The Court upheld the arguments of Mylan and Teva and revoked the preliminary injunctions by a decision dated 20 October 2017, which was deliberated by the three Patent Judges of Barcelona.

In its decision, the Judge first clarified that the judgment of the Madrid High Court of Justice had decided an appeal by Gilead itself regarding an administrative act (refusal of the SPC), and so it does not have a *res iudicata* effect in relation to third parties and therefore it is not binding.

Then, after reviewing the applicable case law from the CJEU since the *Medeva* case (C-322/10), the Judge concluded that claim 27 of the EP'894 patent does not protect the combination of tenofovir + emtricitabine in the sense of Article 3.a) of the Regulation, and therefore SPC'034 would be *prima facie* contrary to said provision and, hence, invalid.

En el año 2017 entraron en vigor dos textos legislativos que tendrán influencia en los litigios de marcas y diseños comunitarios que se siguen en España y que son los siguientes:

- Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre marca de la Unión Europea (en adelante, RMUE).
- Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante, LP).

El RMUE no es más que la versión codificada que recoge todas las modificaciones hechas mediante el Reglamento 2015/2424 al anterior Reglamento de Marca Comunitaria 207/2009.

Los cambios introducidos en el nuevo RMUE alcanzan a aspectos sustantivos, algunos de los cuales ya entraron en vigor en el año 2016. Sin embargo el **1 de octubre de 2017 entró en vigor el nuevo RMUE** lo que implica la plena adopción de este nuevo texto legal.

En España, **la LP**, que tiene algunos efectos directos en los litigios de marcas y diseños, **entró en vigor el 1 de abril de 2017**.

La LP establece la modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM) y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en adelante, LD) para establecer que el Título XII de la LP (Jurisdicción y normas procesales) se aplicará a los litigios de signos distintivos y a los diseños “en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza”.

Esto supone que dichas normas procesales son también aplicables a los litigios que se siguen en España respecto de registros comunitarios en todo lo que no está previsto en sus respectivos Reglamentos (artículo 129.3 RMUE y artículo 88.3 Reglamento 6/2002 de 12 de diciembre de 2001 sobre Dibujos y Modelos Comunitarios).

La LP también añade un apartado 2 a las disposiciones de la LM y de la LD para determinar los casos en que la competencia de los Juzgados de Marca de la Unión se extiende. Dicha extensión se produce respecto de pretensiones que deriven de las respectivas LM y LD cuando se ejerciten de manera acumulada o respecto de las que exista “cualquier otra conexión” y, al menos, una de ellas se base en un registro o solicitud de título comunitario.

In 2017, two legislative texts entered into force that will influence the European Union trademark and community design litigation of Spain and they are as follows:

- Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (hereinafter EUTMR).
- Spanish Patents Act 24/2015, of July 24 (hereinafter SPA).

The EUTMR is no more than a codified version which has been published following all the modifications made by Regulation 2015/2424 to the previous Regulation of Community trade mark 207/2009.

The changes introduced in the new EUTMR cover substantive aspects, some of which were already in force in 2016. However, **the new Regulation entered into force on 1 October 2017**, which means it has fully adopted this new legal text.

In Spain, **the SPA** which has some direct effects on trademark and design litigation, **came into effect on 1 April, 2017**.

The SPA establishes the modification of the Spanish Trademarks Act 17/2001, of December 7 (hereinafter STA) and of the Spanish Designs Act 20/2003, of July 7 (hereinafter SDA) to establish that Title XII of SPA (Jurisdiction and procedural rules) shall apply to the litigation of distinctive signs and designs “in everything that is not incompatible with its own legal identity”.

This means that these procedural rules are also applicable to litigation in Spain regarding community registries in everything that is not set out in their respective Regulations (article 129.3 EUTMR and article 88.3 Regulation 6/2002, of December 12, of Community Designs).

The SPA also adds a section 2 to the provisions of STA and SDA to determine in which cases the competence of the Courts of Union Trademark is extended. The extension occurs with respect to claims from the respective STA and SDA when they are exercised cumulatively or in respect of which there is “any other connection” and, at least, one of them is based on a registration or an application of a community registry.

A la vista de las disposiciones de la LP y transcurrido ahora más de medio año de aplicación de la misma, se señala que entre las consecuencias más importantes de este cambio legislativo para los litigios sobre registros comunitarios están las siguientes:

### **1. Ampliación de los plazos de contestación a la demanda en asuntos de marcas y diseños**

En España, el plazo para contestar la demanda civil en juicio ordinario es de veinte días (art. 404.1 Ley de Enjuiciamiento civil, en adelante LEC).

La LP determina en su artículo 119 que el plazo para contestar una demanda civil de un litigio de patentes sea de dos meses.

El hecho de que la LP en su Exposición de Motivos justifique la ampliación de los plazos de contestación a la demanda en “la complejidad propia de los litigios sobre patentes”, planteó dudas respecto de su aplicación a los litigios de marcas de la Unión Europea y diseños comunitarios.

En este momento, los dos Juzgados Mercantiles de registros comunitarios (JM 1 y 2 de Alicante) conceden el plazo de dos meses para contestar la demanda.

### **2. Ampliación de la competencia exclusiva de los Tribunales de Marca de la Unión Europea (TMUE)**

La modificación que se hace, a través de la LP, de la LM y de la LD viene a clarificar y consolidar la competencia exclusiva de los TMUE en asuntos en los que se juzgan, junto a una pretensión fundada en los Reglamentos comunitarios, otras fundadas en marcas nacionales o internacionales idénticas o similares.

Esto ya venía siendo así por cuanto los TMUE venían aplicando el principio de la jurisdicción más especializada para absorber la competencia en dichos casos.

Ahora bien, el hecho de que la LP haya añadido la extensión de la competencia de los TMUE a pretensiones con “cualquier otra conexión” es visto como la posibilidad de plantear ante los TMUE pretensiones que hasta ahora podían ser rechazadas por los TMUE.

### **3. Ejecución diferida de sentencias**

En los litigios de propiedad industrial, el hecho de que la LEC en su art. 219 limite, de manera general, las condenas con reserva de liquidación en la ejecución, ha sido considerado un grave inconveniente para los titulares de derechos infringidos.

In view of the SPA provisions which have been applied for over six months now, some of the most important consequences of this legislative change for the community registries litigation are as follows:

### **1. Extension of the deadline to respond to trademark and design claims**

In Spain, the deadline for the defendant to submit allegations in ordinary civil proceedings is twenty days (article 404.1 Spanish Civil Procedure Act).

The SPA determines in article 119 that the term for the defendant to submit allegations in civil patent litigation is two months.

The fact that the SPA, in its Statement of Motives, justified this deadline extension for the defendant to submit allegations as being due to “the complexity of patent litigation”, had initially raised doubts about also applying it to European Union trade mark and Community design litigation.

Now, the two European Union Trademark Courts –EUTC-(EUTC 1 and 2 of Alicante) grant defendants a two-month deadline to submit allegations.

### **2. Extension of the exclusive competence of the European Union Trademark Court (EUTC)**

The modification of the STA and SDA, through the SPA, clarifies and consolidates the exclusive competence of the EUTC, when it resolves claims based on Community Regulations, together with other claims founded on identical or similar national or international trademarks.

This was already the solution being given by the EUTC through applying the principle of more specialized jurisdiction to absorb competition in such cases.

However, the fact that the SPA has added the extension of competence of the EUTC to claims with “any other connection” is seen as a way of raising claims before the EUTC, which up to now could have been rejected.

### **3. Deferred enforcement of judgments**

In Intellectual Property litigations, the fact that the Spanish Civil Procedure Act, in article 219, limits the possibility of establishing sentences with reservation of the liquidation in the enforcement proceedings, has been considered a serious inconvenience for the owners of infringed rights.

El Tribunal Supremo en una decisiva sentencia de 24 de octubre de 2012, dictada en un litigio de propiedad industrial, aclaró que dicho artículo 219 debía ser interpretado de manera flexible.

La LP en su artículo 74.5 establece que las diligencias de cálculo o cuantificación y liquidación de daños se efectuarán en ejecución, a partir de las bases fijadas en la sentencia. En la Exposición de Motivos de la LP se dice que la principal razón para ello es que el actor puede carecer, en el momento de interponer la demanda, de la información necesaria para concretar su pretensión indemnizatoria y también que el “considerable esfuerzo” de las partes puede ser injustificado si la sentencia resulta absoluta.

Las mismas razones que justifican esta específica regulación para los litigios de patentes se dan en los litigios de marcas y diseños.

Por ello, aunque este artículo no pertenece al Título de la LP aplicable a las marcas y diseños, la Audiencia Provincial de Alicante (TMUE), en una sentencia de 13 de noviembre de 2017, en un asunto de modelo comunitario, reconoce tener en cuenta, para interpretar el artículo 219 de la LEC, la postura del legislador en la LP.

Por último y de manera complementaria se destaca que otro de los cambios en los litigios de marcas y diseños comunitarios en España derivará de la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en respuesta a la cuestión prejudicial C-381/16, planteada por el Tribunal Supremo español.

En efecto, con fecha 23 de noviembre de 2017, el TJUE ha respondido al Tribunal Supremo que puede aplicarse a las MUE la disposición nacional española, contenida en el artículo 2.2 de la LM, que permite reivindicar una marca solicitada con fraude de derechos o con violación de obligación legal o contractual, como si se tratara de una marca nacional registrada en España (artículo 16 RMUE).

In a decisive ruling in an Intellectual Property litigation of 24 October 2012, the Supreme Court clarified that article 219 should be interpreted flexibly.

In its article 74.5, the SPA establishes that the procedures for calculation or quantifying and settling damages will be carried out during the enforcement proceedings on the bases established in the judgment. In its Statement of Motives, the SPA explains that this is mainly because the plaintiff, at the time of filing the claim, may lack the necessary information to specify his claim for compensation and also that the “considerable effort” made by the parties may be unjustified if the judgment is rendered absolving.

The same reasons that justify this specific regulation for patent litigation occur in trademark and design litigation.

Therefore, although this article does not belong to the Title of the SPA applicable to the trademarks and designs, the Court of Appeal of Alicante (EUTC) by judgment of 13 November 2017, in a community model matter, acknowledges taking into account the position of the legislator in the SPA to interpret article 219 of the Spanish Civil Procedure Act.

Finally, another of the changes in the European Union trademark and community design litigation in Spain will come from a recent judgment of the Court of Justice of the European Union (CJEU) in response to the preliminary ruling C-381/16, raised by the Spanish Supreme Court.

Indeed, on 23 November 2017, the CJEU replied to the Spanish Supreme Court that it can apply to the EUTM, the Spanish national provision, contained in article 2.2 of the STA, which allows a trademark applied for with fraud of rights or with violation of legal or contractual obligation, to be claimed, as if it were a national trademark registered in Spain (article 16 EUTMR).

### 3 LOS GASTOS DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS FALSAS STORAGE COSTS GENERATED BY THE DEPOSIT OF COUNTERFEIT GOODS

En nuestras Newsletters de abril de 2011 y de abril de 2014, abordábamos la controversia surgida en la jurisdicción penal acerca de quién debe asumir los gastos que producen el almacenamiento

In our April 2011 and April 2014 Newsletters, we addressed the issue in the Spanish criminal jurisdiction as to which party should be held responsible for the storage and destruction



y la destrucción de una mercancía que vulnera derechos de propiedad industrial y que es objeto de un procedimiento judicial.

En el primer artículo exponíamos las resoluciones contradictorias dictadas (a veces por la misma Audiencia Provincial) en procedimientos penales incoados a raíz de la denuncia interpuesta por el titular de una marca ilícitamente reproducida en productos que viajaban dentro de un contenedor retenido por las autoridades aduaneras en virtud del Reglamento comunitario 1383/2003 (posteriormente Reglamento 608/2013).

En el segundo artículo exponíamos además la existencia de otras resoluciones que rechazaban extrapolar este debate a procedimientos penales incoados por la incautación de productos de la misma naturaleza realizada de oficio por determinados cuerpos policiales al margen de dicho reglamento comunitario.

El primer grupo de resoluciones contradictorias traían causa de las reclamaciones formuladas por diferentes navieras en procedimientos penales que dirigían sus pretensiones contra el titular de las marcas infringidas (por su clara solvencia y fácil localización) en lugar de contra sus clientes (los importadores y verdaderos propietarios de dicha mercancía cuya solvencia y localización resulta por lo general menos clara) pretendiendo una interpretación extensiva del reglamento comunitario más allá del procedimiento administrativo que el propio reglamento regula.

Lejos de suponer una cuestión pacífica, se ha ido confirmando la tesis consistente en que las previsiones del reglamento únicamente son de aplicación durante el procedimiento (administrativo) para el que están previstas, con lo que dichos gastos no deben ser sufragados por el titular de la marca infringida mientras se sigue un procedimiento judicial.

En la actualidad, ciertas empresas logísticas han intentado llevar este mismo debate a otras jurisdicciones (mercantil y civil) alegando la misma interpretación extensiva del reglamento comunitario y añadiendo otros argumentos que permitieran a un juzgado de dichas jurisdicciones (que no ha participado en la instrucción de la causa penal) pronunciarse sobre dichas pretensiones.

En la jurisdicción mercantil, la empresa logística alegó el incumplimiento contractual de un supuesto contrato de arrendamiento consistente en el servicio de depósito de mercancías invocando una serie de preceptos del Código Civil. El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Zaragoza estimó en enero de 2017 la declinatoria de jurisdicción, planteada por el titular de las marcas infringidas, absteniéndose de resolver sobre el fondo del asunto y archivando el procedimiento incoado y redirigiendo a la actora (la empresa logística) a la jurisdicción civil.

costs of goods infringing IP rights which are the object of judicial proceedings.

In the first article, we explained the contradictory judgments (sometimes issued by the same Court of Appeal) in criminal proceedings initiated as a result of a complaint filed by the owner of a brand illegally reproduced in products transported inside a container seized by Customs Authorities based on Regulation (EU) 1383/2003 (later Regulation (EU) 608/2013).

In the second article, we also explained the existence of other judgements refusing to extrapolate this discussion to criminal proceedings initiated as a result of *ex-officio* seizures of similar goods conducted by Police outside the scope of said EU Regulation.

The first group of contradictory judgements were the result of claims filed by shipping companies in the course of criminal proceedings. These claims were directed against the rights holders (due to their financial solvency and easily identifiable whereabouts) instead of against the clients of the shipping companies (the importers and real owners of the goods, whose solvency and whereabouts are generally less clear), therefore aiming for an extensive interpretation of the EU Regulation beyond the administrative proceeding governed by said EU Regulation.

Far from being a matter of agreement, the interpretation which has gained most ground considers that the EU Regulation provisions should only be applied within the framework of the (administrative) proceeding for which they are foreseen, and consequently such storage costs should not be borne by the rights holder while the judicial proceeding is ongoing.

Recently certain logistic companies have tried to bring this discussion into other jurisdictions (commercial and civil) requesting the same extensive interpretation of the EU Regulation and adding other arguments so that a court belonging to such jurisdictions (and therefore not involved in the criminal proceedings) can issue a judgement on such claims.

In the commercial jurisdiction, the logistic company filed an action claiming the breach of an alleged rental agreement consisting of a deposit of goods and invoking certain provisions of the Spanish Civil Code. In January 2017 the Commercial Court No. 2 of Zaragoza upheld the allegation of lack of jurisdiction brought by the rights holder, and refrained from issuing a judgement regarding the merits of the case, shelving the proceeding initiated as a result of the legal action and re-directing the claimant (the logistic company) to the civil jurisdiction.

En la jurisdicción civil, la empresa logística alegó los mismos motivos alegados en la jurisdicción mercantil y el Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Zaragoza, entrando a resolver sobre el fondo del asunto, desestimó en septiembre de 2017 todas sus reclamaciones aceptando íntegramente los argumentos esgrimidos por el titular de las marcas infringidas en su contestación a la demanda.

Dicho Juzgado de Zaragoza sentenció que nada podía reclamarse a quien ninguna solicitud de depósito de mercancías había solicitado y a quien ni tan siquiera es propietaria de las mismas, sino una mera perjudicada víctima de un delito, confirmando que la perjudicada por la acción de un tercero, nada tiene que abonar respecto de los gastos producidos por la inmovilización de las mercancías y menos aún por los gastos de seguro y documentación.

In the civil jurisdiction, the logistic company invoked the same arguments as those set out in the commercial jurisdiction. In September 2017, the First Instance Court No. 19 of Zaragoza, this time deciding on the merits of the case, dismissed all the plaintiff's claims and accepted, in their entirety, the arguments posed by the rights holder in response to the lawsuit.

The Court of Zaragoza resolved that no claim could be made on a party which had not requested any deposit of the goods and which is not even the owner of such goods but rather, the injured party of the committed crime. The court therefore confirmed that following the actions of a third party, the injured party should not be held responsible for the costs brought about by the seizure of goods and even less so for the related handling and insurance costs.

## 4 DOS NUEVOS SOCIOS EN GRAU & ANGULO TWO NEW PARTNERS AT GRAU & ANGULO

Ignacio Marqués y Carlota Viola, abogados de Grau & Angulo, han sido promovidos a socios con efectos a partir de enero de 2018. Ambos contribuyen de una manera muy significativa al desarrollo de la firma.

Ignacio se ocupa de asuntos de patentes, marcas, diseños, derechos de autor, competencia desleal y publicidad, dada su amplia experiencia en todas estas materias, tanto a nivel litigioso como de asesoramiento transaccional. Representa a reconocidos clientes de los sectores del ocio y de la salud, y ha impulsado el área de derechos de autor de la firma.

Carlota, que se incorporó a Grau & Angulo en 2008, tiene una amplia experiencia en marcas, diseños industriales, derechos de autor, competencia desleal y nombres de dominio, y ha jugado un papel crucial en la protección estratégica de las marcas más conocidas de perfumes y de las creaciones en el sector de la moda.

Ignacio Marqués and Carlota Viola, lawyers of Grau & Angulo, have been promoted to partners as of January 2018. Both lawyers hold crucial roles in the firm's development.

Ignacio works in matters relating to patents, trademarks, design, copyright, unfair competition and advertising, where he has a wealth of experience both as a litigator and as a transactional advisor. He works with high profile clients in the entertainment, media and healthcare sectors, and he has particularly boosted the firm's copyright portfolio.

Carlota joined Grau & Angulo in 2008. She is widely experienced in the area of trademarks, industrial designs, copyright, unfair competition and domain names and has been a key player in the strategic trademark enforcement of major perfume brands and creations in the fashion sector.



*Ignacio Marqués  
Carlota Viola*

**GRAU & ANGULO**  
**ABOGADOS**

**BARCELONA**

C/ Josep Irla i Bosch 5-7, 8º  
08034 Barcelona, Spain  
Tel: +34 93 202 34 56  
Fax: +34 93 240 53 83

**MADRID**

C/ Núñez de Balboa 120, 5º  
28006 Madrid, Spain  
Tel: +34 91 353 36 77  
Fax: +34 91 350 26 64

**LAS PALMAS**

C/ Padre José de Sosa 1, 2º izq.  
35001 Las Palmas de Gran Canaria, Spain  
Tel: +34 928 33 29 26  
Fax: +34 928 33 57 87

[www.ga-ip.com](http://www.ga-ip.com)

Queda prohibida la copia, cesión o reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa, expresa y por escrito de GRAU & ANGULO S.L.P.

Sus datos profesionales serán incluidos en un fichero ubicado en nuestras oficinas (C/ Josep Irla i Bosch, 5-7 08034 Barcelona) y podrán ser utilizados para el envío de información jurídica de actualidad o actividades de formación de nuestro despacho. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, puede dirigirse a nosotros por correo electrónico a [info@ga-ip.com](mailto:info@ga-ip.com), o por correo ordinario.

*It is prohibited to copy or reproduce fully or any part thereof of this quarterly publication without the previous express authorization and written consent of GRAU & ANGULO S.L.P.*

*Your professional data will be held in a file at our Barcelona office (C/ Josep Irla i Bosch, 5-7 Barcelona 08034 - SPAIN) and may be used to send you legal updates or information concerning our firm. If you wish to exercise your right to access, modify or cancel this data you can contact us either by email ([info@ga-ip.com](mailto:info@ga-ip.com)) or by post.*